

deracion; elevense las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para la revision de los procedimientos. El C. Juez de Distrito definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó—*Antonio Rivera*.—Ante mí.—*Antonio Garcia Mozqueira*.

Es copia que certifico, la cual se saca en cumplimiento de lo mandado, para su inscripcion en el Semanario Judicial de la Federacion. Puebla, Setiembre 25 de 1873.—*Antonio Garcia Mozqueira*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 9 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por Antonia Gutierrez, á nombre de su hijo Antonio Balderrama, contra el veredicto del jurado militar que condenó á Balderrama, soldado del 18º batallon, á la pena capital por haber dado muerte con ventaja al cabo del batallon 19º, Homobono Pastor, cuyo hecho se verificó segun lo expuesto, por un militar contra un militar y dentro de edificio tambien militar; y considerando: que en el expediente y actuaciones que se acompañaron á él, aparece que el jurado militar obró dentro del círculo de sus facultades sin violar garantía alguna; por lo expuesto, se decreta: que se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 24 de Setiembre próximo pasado, por el Juez de Distrito de Puebla, en la parte que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al soldado Antonio Balderrama, por haber sido juzgado militarmente y sentenciado á sufrir la pena de muerte.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron

los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*José Arteaga*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Auza*.—*S. Guzman*.—*L. Velasquez*.—*M. Zavala*.—*José Garcia Ramirez*.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 14 de 1873.—*Lic. Enrique Landa* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por los reos Santiago y Nazario Ramirez, contra la Gefatura política de Silao, que los juzgó como salteadores, condenándolos á la pena de muerte.

EDICTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Santiago y Nazario Ramirez, promovieron en 8 de Mayo del presente año, el recurso de amparo contra el C. Gefe político de Silao, que al juzgarlos y sentenciarlos á la pena de muerte, violó en sus personas las garantías individuales consignadas en el artículo 20 de la Constitucion federal. El C. Gefe político de Silao, al rendir el informe de que habla el artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, manifestó al Juzgado, que los quejosos habian sido juzgados y sentenciados de conformidad con una ley cuya fecha no se cita, que suspendió exclusivamente para los salteadores y plagiarios entre otras garantías individuales, la que invocan como fundamento de la procedencia del recurso intentado. Como á este informe no se acompañó ningún justificante, fué necesario recibir el juicio á prueba, y en el término

concedido con este objeto, se recabó del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, testimonio de la acta instruida contra los quejosos.

El hecho que motivó el proceso, fué el robo con asalto que tuvo lugar la noche del día 18 de Diciembre de 1870, en el rancho llamado de la Soledad, y la ley que normó los procedimientos y segun la cual fueron condenados los quejosos, fué la de 9 de Abril del mismo año. En las constancias de dicha causa, que en testimonio obra en estas actuaciones, aparece justificada plenamente la existencia del delito, pero no la delincuencia de los procesados.

El Gefe político de Silao en la sentencia que pronunció, condenándolos á la pena de muerte, se fundó en presunciones mas ó menos vehementes; pero el mismo dice, que la reunion de indicios que resultaron contra los reos, no forma una prueba plena que exigen las leyes como necesaria para condenar á un reo por los tribunales comunes. La falta de prueba plena de culpabilidad de los quejosos, hace que en el presente caso deba concederse el amparo que solicitan, porque la ley segun la cual fueron juzgados, supone la justificacion legal de la delincuencia de las personas á quienes se le aplique, como se deduce de que terminantemente expresa que no se refiere á otros reos, sino exclusivamente á los salteadores y plagiarios, y en su artículo 3º exige para que se aplique la pena, que esté probado el delito.

El carácter privilegiado de dicha ley, no implica que pueda pronunciarse una sentencia condenatoria, fundada en pruebas que segun las leyes generales y los principios de derecho, sean insuficientes para demostrar que el procesado sea autor del plagio ó del robo con asalto que se le atribuye. No estando justificado que los quejosos debieron ser considerados como salteadores, no está probado que en la época en que fueron juzgados estaban suspensas para ellos las garantías individuales consignadas en el artículo 20 de la Constitucion federal. Por

las razones expuestas, el Promotor fiscal pide, se sirva el Juzgado conceder el amparo que solicitan Santiago y Nazario Ramirez.

Guanajuato, 30 de Junio de 1873.—*José Aguilar y Córdova.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

Guanajuato, 11 de Julio de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Nazario y Santiago Ramirez, contra el acta criminal que les instruyó el C. Gefe del Partido de Silao, condenándolos á muerte como salteadores, y violando en concepto de ellos, las garantías que establecen las fracciones 3ª y 5ª del artículo 20 del Pacto federal, resultando: que en Diciembre de 1870 se los procesó con arreglo á la ley de 9 de Abril del mismo año, por el robo acaecido en el rancho de la Soledad, la noche del 18 al 19 del mencionado Diciembre; resultando: que los cargos que aparecen contra los quejosos, no pasan de ser presunciones mas ó menos graves, pero que no constituyen una prueba perfecta de culpabilidad, como lo asienta en su sentencia la autoridad política que los juzgó; resultando: que ni aun la prueba privilegiada que admite la circular de 12 de Marzo de 1861 ha podido obtenerse en contra de los dos individuos de que se viene hablando, supuesto que no se justificó que hubiesen perpetrado un robo, ni que hayan pertenecido á una banda de foragidos.

Considerando: que por no estar acreditado que sean salteadores ni plagiarios, y gozan y han gozado de todas las garantías individuales que reconoce y sanciona la Seccion 1ª de la Constitucion, y en particular de las que contiene el artículo 20 en las dos fracciones citadas, por que exclusivamente para los criminales de una y otra especie y no para los demás, han estado suspensas algunas de dichas garantías, segun la enunciada ley de 9 de Abril de 1870.

Considerando: que el hecho de no haber sido careados los promoventes con todos los testigos que depusieron en su contra, y el de no haber sido oídos en defensa, por sí mismos, ó por personas de su confianza ó de ambas maneras, son otras tantas infracciones del repetido precepto constitucional, en perjuicio de los derechos naturales que competen á aquellos. Por tales fundamentos, de conformidad con el pedimento fiscal y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Nazario y Santiago Ramirez, contra los procedimientos del C. Gefe del Partido de Silao, en virtud de los cuales juzgó y sentenció á la pena de muerte á los quejosos, como salteadores, con violacion de las fracciones 3ª y 5ª del artículo 20 de la Carta fundamental de la República. Notifíquese este fallo á las partes; publíquese en el Periódico Oficial, y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales.

Así el nominado Juez de Distrito, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, Julio 18 de 1873.—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto, 25 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Guanajuato, por los reos Santiago y Nazario Ramirez, contra la Gefatura política de Silao, que los juzgó como salteadores, condenándoles á muerte con arreglo á la ley de 9 de Abril de 1870, con cuyos procedimientos creén los quejosos se han violado en sus personas las garantías que otorgan las fracciones 3ª y 5ª del artículo 20 de la Constitución general de la República.

Vistas las constancias de autos y apare-

ciendo de ellas justificado el delito de que se acusa á los peticionarios, y que la autoridad contra quien se solicita el amparo ha obrado en la órbita de sus atribuciones, sin que sus procedimientos importen violacion alguna de las garantías invocadas por los Ramirez en su escrito de queja. Con tales fundamentos se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada en 11 de Julio de 1873, por el Juzgado de Distrito de Guanajuato concediendo el amparo, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Nazario y Santiago Ramirez, en las garantías á que se refiere el presente juicio.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Azaí.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 11 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.